

ACTIVIZENSHIP

CIVIC SPACE WATCH REPORT 2020 • STORIES FROM THE LOCKDOWN

RESUMEN EJECUTIVO

El espacio cívico durante el confinamiento

La sociedad civil libera todo su potencial

El año 2020 ha estado claramente marcado por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 cuyas consecuencias para nuestras sociedades, economías y democracias no tienen término de comparación en Europa en tiempos de paz. Nos hemos visto obligados a cambiar nuestra manera de vivir para protegernos y proteger a los demás, y a actuar de forma responsable como individuos y como comunidad.

Por un lado, los gobiernos tuvieron que dar una respuesta rápida y contundente en poco tiempo lo que supuso que recurriesen masivamente al uso de sus poderes excepcionales a expensas de los mecanismos democráticos de control y corrección. Algunos gobiernos aprovecharon incluso esta situación excepcional para legitimar su intento de acaparar mayores poderes. Dicho esto, incluso en los países en que los gobiernos han sido elogiados por su enfoque comedido, esta excepcional situación ha puesto de manifiesto los graves riesgos a los que se exponen las democracias europeas, lo que agrava la tendencia de deterioro democrático documentada ya desde hace varios años.

Por otro lado, el año 2020 también se ha visto marcado por un despertar de la ciudadanía activa que ha tratado por todos los medios de garantizar a la mayor escala posible el acceso efectivo a aquellos derechos básicos que la crisis ha hecho tambalear. Muchos han encontrado formas creativas de ser útiles en sus comunidades, de ofrecer herramientas sociales y culturales contra el aislamiento, de proponerse como voluntarios para prestar apoyo a los más débiles y vulnerables que a menudo resultan ser los más pobres, de actuar como garantes de los derechos frente a las consecuencias de las crisis democráticas y sociales; y de proponer alternativas sociales.

Por todas partes, tanto los actores organizados de la sociedad civil como los ciudadanos y la población en general de forma espontánea, han estado y siguen estando en primera línea para dar testimonio de las situaciones precarias que sufren muchos, tratando de responder a las necesidades de los más desfavorecidos, alertar sobre las limitaciones y las consecuencias nefastas de ciertas políticas públicas, mostrar su rechazo ante los abusos de poder y poner la solidaridad en el centro de la respuesta a la

crisis. Durante el confinamiento, hemos visto una reducción todavía mayor del espacio reservado a la sociedad civil pero incluso en estas condiciones especialmente adversas, esta misma sociedad civil ha mostrado un nivel excepcional de dinamismo.

El Foro Cívico Europeo (ECF, por sus siglas en inglés) junto con sus miembros, ha contribuido a este dinamismo y ha analizado estas tendencias a través de su Observatorio del Espacio Cívico (<http://civicspacewatch.eu/solidarity-amid-covid-19-crisis/>), una plataforma que documenta las amenazas a los derechos fundamentales, pero también recaba iniciativas positivas, incluidas las destinadas a contrarrestar estas amenazas. La secretaría del ECF realizó un estudio sobre los medios de comunicación y mantuvo permanentemente informadas a las ONG sobre el terreno. El análisis se basa en los resultados de esa actividad de seguimiento, en los más de 350 testimonios recabados en el período comprendido entre enero y octubre de 2020, en tres reuniones de consulta con el grupo de trabajo del ECF compuesto por las plataformas nacionales de ONG (3 de abril, 23 de abril y 14 de octubre de 2020), dos estudios relativos a las repercusiones de la COVID-19 sobre los derechos fundamentales, por un lado, y sobre el diálogo civil y la sostenibilidad económica del sector, por el otro; además de cinco entrevistas con ONG locales.

El análisis muestra las dificultades a las que tuvo que enfrentarse la sociedad civil a lo largo del año 2020, aborda en qué medida las medidas públicas aplicadas a raíz de la pandemia del coronavirus afectaron al espacio cívico y analiza las respuestas aportadas por los diferentes actores cívicos. La primera parte del análisis se centra en los desafíos a los que se enfrenta la sociedad civil en función de cuatro elementos que consideramos cruciales para que la sociedad civil pueda desarrollar todo su potencial:

1. Un panorama político, cultural y socioeconómico propicio;
2. El respeto de las libertades cívicas;
3. Un diálogo fructífero entre la sociedad civil y los órganos de gobierno;
4. Un marco de apoyo para la viabilidad financiera y la sostenibilidad de las OSC.

En la segunda parte se examinan las diferentes propuestas de la sociedad civil. El análisis se complementa con seis estudios de caso redactados por organizaciones de vigilancia a escala nacional y siete entrevistas con los testimonios premiados con el premio Orgullo Cívico 2020.

1. La COVID-19 hace tambalear el panorama socioeconómico, político y cultural

Los recortes en inversión pública y los innumerables intentos de privatización del sector de la sanidad y de las infraestructuras de protección social en los últimos años han debilitado la capacidad de Europa para responder eficazmente a la crisis sanitaria. Como consecuencia, muchos Estados han restringido la libertad de circulación y el acceso al espacio público para disminuir la presión sobre el sistema sanitario, un sistema que ha tratado por todos los medios de satisfacer las demandas de la población y de mantener los limitados recursos disponibles a disposición de los grupos de mayor riesgo.

La crisis sanitaria desembocó rápidamente en una crisis social y económica, con decenas de millones de personas sin trabajo, muchas de las cuales perdieron parcial o totalmente sus fuentes de ingresos y por ende se vieron incapaces de satisfacer las necesidades básicas de sus familias en materia de alimentación, vivienda y protección de la salud. La conmoción económica desencadenada por las consecuencias de la emergencia sanitaria multiplica exponencialmente las necesidades sociales de la población y las desigualdades existentes. Grupos enteros de población atravesaron serias dificultades socioeconómicas, además de aquellos cuya situación era ya de por sí frágil. Los Estados aplicaron medidas para tratar de compensar, al menos en parte, los efectos perturbadores en los hogares y las empresas, mostrando una voluntad de actuar sin precedentes en las últimas décadas, pero esas medidas económicas han resultado a menudo insuficientes y limitadas.

En el contexto de la crisis del coronavirus, la cuestión de cómo garantizar la vida democrática en una situación de emergencia ha sido todo un reto. Con el objetivo de tomar decisiones expeditivas, hemos observado una tendencia general a la concentración de poderes por parte de los gobiernos de toda Europa al tiempo que se limitaba el papel de las instituciones encargadas del control democrático. En los países en los que el funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho ya estaban en la cuerda floja, las autoridades han aprovechado la situación para concentrar aún más poder y aprobar leyes controvertidas que nada tenían que ver con la pandemia. A medida que

avanzamos hacia una normalización del virus en nuestras vidas, una convivencia a largo plazo, el peligro es que se normalicen también estas prácticas coercitivas surgidas en el marco de una situación de emergencia.

Precisamente en este contexto de reducción de los mecanismos institucionales de separación de poderes y rendición de cuentas, el papel de los agentes cívicos como garantes del control democrático es ahora más crucial que nunca. No obstante, estos agentes se han visto gravemente debilitados a causa de la dificultad de acceso al espacio cívico y la disminución de sus capacidades de actuación debido al impacto económico de la crisis del coronavirus en sus recursos. A pesar de ello, las comunidades, asociaciones y movimientos sociales se han movilizado rápidamente y con éxito para proporcionar un acceso efectivo a los derechos básicos que la crisis ha hecho peligrar, y para supervisar y abogar por una justicia para todos.

La respuesta solidaria a la crisis vino de la mano de los movimientos de las bases y supuso una oportunidad para reconstruir la confianza en los enfoques colectivos que había ido desapareciendo en los últimos tiempos, tras décadas de creciente individualismo y competencia generalizada. Sin embargo, las lecciones aprendidas de la pandemia de la COVID-19 son un tema de debate que no está en absoluto zanjado. Existe el riesgo de que la desesperación de la sociedad causada por las dificultades socioeconómicas y la incertidumbre sobre el futuro inmediato alimenten la desconfianza en las instituciones. El sentimiento general de unión de todas las fuerzas en pos de una lucha común y los altos niveles de confianza en los gobiernos que caracterizaron la primera fase de la pandemia se han desvanecido rápidamente dando paso a varias acciones de protesta, incluyendo las manifestaciones en las calles. Los partidos y movimientos políticos regresivos ya están aprovechando estas tensiones sociales para su propio beneficio con mayor o menor éxito según el país.

2. Deterioro continuo de las libertades cívicas

El informe de 2019 sobre el espacio cívico en la Unión Europea mostró un aumento de las restricciones (de hecho y de derecho) a las libertades cívicas en toda la región siguiendo varias tendencias que contribuyendo a reducir el espacio de acción de los agentes cívicos. En 2020, la pandemia del coronavirus puso nuestras democracias a prueba y generó serias dificultades a la hora de ejercer nuestras libertades cívicas. La pandemia reprodujo y magnificó además algunas de las tendencias que ya existían, mientras que otras se han ido desarrollando en paralelo a la crisis sanitaria. Todas ellas se unieron a las ya documentadas en años anteriores y crearon un entorno extremadamente difícil para la sociedad civil en 2020.

2.1 Utilizar la legislación en materia de transparencia para limitar la libertad de asociación

Siguiendo los pasos de la ley húngara sobre la transparencia de las organizaciones que reciben apoyo desde el extranjero, denominada «Lex ONG», que fue declarada contraria al derecho de asociación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2020, **tres países (PL, BG y EL) han propuesto o introducido legislación destinada en teoría a mejorar la transparencia, pero que en la práctica discrimina, sobrecarga y estigmatiza a este sector.** El uso de la legislación sobre transparencia para restringir la libertad de asociación es una tendencia que ya quedó patente en el informe de 2019. Si bien estas leyes presentan diferencias, las preocupaciones y amenazas potenciales para la sociedad civil que plantean son similares, entre ellas las disposiciones que obligan a duplicar la elaboración de informes lo que consume una parte considerable de los recursos de las OSC; sanciones desproporcionadas en caso de incumplimiento; discriminación de las OSC respecto a otras entidades (como las empresas privadas) que no están sujetas a los mismos requisitos; y escarnio de este sector ante la opinión pública. Este tipo de legislación afecta negativamente a la capacidad de las OSC de desempeñar sus funciones en contextos en los que la libertad de asociación también se ve cuestionada por campañas de desprestigio, el diálogo con las autoridades públicas es cada vez más difícil, y los recursos financieros son cada vez más limitados.

2.2 Cierre del espacio público, restricción de la libertad de reunión pacífica

A medida que el coronavirus se fue propagando por la Unión Europea, las autoridades nacionales comenzaron a restringir el acceso al espacio público y a limitar la posibilidad de reunión entre las personas. Durante la primera ola de la pandemia, la mayoría de los países de la Unión Europea restringieron de facto la libertad de reunión como consecuencia de las limitaciones impuestas a la circulación y asociación de las personas sin mencionar específicamente el derecho de reunión pacífica, dejando así cierta confusión sobre qué actividades estaban permitidas y cuáles no, producida por una redacción «extensa y ambigua» de los decretos. A menudo, la ambigüedad a la hora de abordar el derecho de reunión pacífica dio lugar a que las autoridades competentes dispusiesen de una discreción excesiva para autorizar o no estas reuniones.

En general, en toda Europa, **el requisito de tener que notificar a las autoridades la intención de organizar una reunión ha empezado a funcionar de jure o de facto como un sistema de autorización,** incluso en el caso de pequeñas reuniones de un puñado de participantes. En consecuencia, incluso cuando no existía una prohibición total, las autoridades locales solían restringir el derecho a la libertad de reunión por motivos de salud pública. En varios casos, **se ha dispersado, multado o detenido a manifestantes pacíficos por no haber notificado a las autoridades competentes o por no haber recibido la autorización correspondiente.** Además, con frecuencia las autoridades públicas han trasladado a los organizadores la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad durante las manifestaciones públicas en lugar de considerarla una responsabilidad compartida.

A medida que empezaron a descender las cifras relativas a las hospitalizaciones e infecciones, los gobiernos levantaron lentamente las restricciones impuestas por la emergencia de la pandemia y algunos Estados que mantenían limitaciones a las grandes reuniones de personas hicieron excepciones para las manifestaciones. Sin embargo, la libertad de reunión siguió estando restringida en algunos países incluso cuando se inició la desescalada en otras áreas de la vida pública (por ejemplo, en Rumania). Además, **en varios Estados, si bien se**

permitían las manifestaciones, las autoridades no dudaron en introducir otros requisitos adicionales, además del respeto de las medidas de higiene (distancias de seguridad y uso de mascarillas protectoras), como limitaciones en cuanto al número de participantes o disposiciones sobre la forma de reunirse (permitiendo las manifestaciones estáticas, pero prohibiendo las marchas).

Cabe destacar que, a lo largo del año, los Estados miembros modificaron constantemente la normativa y la actitud de las autoridades de ejecución con respecto al derecho de reunión pacífica, creando una gran incertidumbre en torno al ejercicio de este derecho. Además, en algunos países, si bien el derecho estaba protegido *por ley*, los funcionarios públicos desalentaban en la medida de lo posible el uso de la manifestación pública como forma de participación política. A veces, el discurso público también difuminaba las líneas entre las reuniones de personas con el fin de protestar y las reuniones con otros fines de socialización.

2.3 Garantizar la seguridad en el espacio público, controlar la disidencia

La pandemia de la COVID-19 ha sido enmarcada como un asunto de seguridad pública. Especialmente durante la primera ola, los discursos políticos describían los esfuerzos para frenar la propagación del virus como una «guerra» contra el virus, trasladando así la responsabilidad de «combatir» la pandemia a los ciudadanos individuales. En la mayoría de los Estados, esta agresividad en los discursos sobre seguridad se acompañó del uso de métodos coercitivos para hacer cumplir las restricciones relacionadas con la COVID-19 y el cierre del espacio público. En este contexto, los ciudadanos perdieron la confianza en el uso del espacio público para las necesidades cotidianas más básicas, y sobre todo en la posibilidad de ocupar este espacio para el desarrollo de acciones de participación y de protesta pública. Este clima de desconfianza y terror afectó a la capacidad de las personas para utilizar el espacio público y ejercer sus derechos fundamentales, incluso cuando el despliegue de las fuerzas de seguridad para hacer cumplir las restricciones y el discurso de seguridad no se dirigían directamente a las libertades cívicas. En algunos casos, el simple hecho de reunirse en la calle y ocupar el espacio público se convirtió en un acto de protesta y resistencia.

2.3.1 Despliegue del aparato coercitivo para controlar la pandemia

En la mayoría de los países, la policía fue la encargada de hacer respetar las disposiciones ligadas a la pandemia. En algunos países, los gobiernos también sacaron al ejército a la calle para hacer cumplir las restricciones a la libertad de circulación. Algunos Estados introdujeron incluso sanciones más graves y otorgaron (o intentaron otorgar) a las fuerzas policiales nuevas facultades para hacerlas cumplir (especialmente en IE y PL). Por ejemplo, algunos Estados miembros (en AT, LT y LV) concedieron a los agentes de policía la facultad de imponer multas in situ. En otros países (como en HU y RO), se dotó a la policía de competencias adicionales para gestionar o sancionar aquellos contenidos que las autoridades considerasen falsos o (en BG, PL, SI y HR) para acceder a datos personales de los ciudadanos con el fin de rastrear la propagación del virus, lo que plantea serios problemas de privacidad.

En muchos países, se han documentado casos de abuso de poder por parte de las fuerzas de policía a la hora de poner de multas (en AT, RO, PL y ES), así como de utilizar la fuerza contra la población (en HR, RO, ES, BE, FR y EL). Las multas y los abusos policiales en toda Europa afectaron de manera desproporcionada a ciertos grupos raciales, incluidas las personas de color, la población romaní, las personas desplazadas y las personas sin hogar. En este sentido, la pandemia amplificó una tendencia de abusos policiales contra estos grupos que ya existía en muchos países.

2.3.2 Férreo control de la libertad de reunión y de las protestas

En algunos casos (contamos con ejemplos documentados en HU, PL, SI y FR), las fuerzas y cuerpos de seguridad dotadas de nuevas competencias para garantizar el cumplimiento de las normas COVID-19 aplicaron toda la dureza de la ley contra personas que ejercían su derecho de reunión pacífica, y los manifestantes pacíficos se enfrentaron a sanciones administrativas y penales por infringir las restricciones ligadas a la COVID-19, lo que llevó a muchos a preguntarse si la intención subyacente de las autoridades no era reducir la disidencia. También se llevaron a cabo varias detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos no relacionadas con las restricciones de la COVID-19, en algunos casos con violencia (por

ejemplo, en FR, BG, PL y ES), incluso durante las manifestaciones de Black Lives Matter (por ejemplo, FR, BE, DE y EL).

2.3.3 Control de la libertad de expresión y asociación

Desde el inicio de la pandemia mundial, en toda Europa, varios gobiernos han restringido el acceso a la información, han impedido la labor los medios de comunicación y han mostrado una intolerancia general frente a las críticas. Esto también ha quedado patente en las pruebas recabadas en algunos países sobre las campañas de desprestigio contra las organizaciones de la sociedad civil (en CZ, EL, PL, SI y HU). En algunos países (en HU, BG, RO, PL y FR), se han tomado medidas para controlar y sancionar a aquellos ciudadanos, activistas y periodistas críticos con las acciones de los gobiernos. La gravedad de las acciones varía en gran medida de un país a otro, en términos de represalias contra los activistas, pero todas ellas contribuyen a crear un efecto paralizante en aquellos ciudadanos y activistas que exigen a las autoridades públicas que rindan cuentas. En unos pocos países, hemos sido testigos de cómo la policía ha obstaculizado el trabajo de periodistas y ciudadanos que cubrían las noticias (en FR, BE, BG y HR). Esas interferencias incluyen detenciones y agresiones físicas. Los informes con los que contamos (FR y EL) también muestran el uso del poder coercitivo contra las asociaciones que trabajan con migrantes.

2.4 Los cambios legislativos restringen la libertad de reunión más allá de la COVID-19

Ya en nuestro informe de 2019 destacamos cómo, en los últimos años, varios países habían endurecido su postura frente a las manifestaciones públicas restringiendo el espacio accesible a las protestas y aumentando las sanciones. En 2020 se introdujeron nuevas leyes sobre las manifestaciones públicas en Grecia y se debatieron en Francia y Polonia, mientras que en Italia y España los gobiernos comenzaron a revisar su legislación en la materia.

2.5 Recopilación de datos y vigilancia

Al tiempo que «rastrear el virus» se convirtió en el mantra para hacer frente a la crisis sanitaria, las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos de toda Europa expresaron su preocupación por el derecho a la privacidad

y por el aumento del uso de las tecnologías de vigilancia. Estas preocupaciones revisten todavía más importancia en aquellos países en los que las medidas impuestas permiten proporcionar o intentan proporcionar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley competencias adicionales para recabar y utilizar datos personales, incluidos los números de teléfonos móviles, aplicaciones de geolocalización y otras tecnologías (en BL, PL, SI y HR). Estas competencias pueden resultar sumamente intrusivas y no son proporcionales a la necesidad. Además, existe el grave riesgo de que esos datos se utilicen más allá de su finalidad de rastrear la propagación del virus, por ejemplo, en procedimientos penales por infringir las medidas impuestas por los gobiernos.

Estas intrusiones podrían tener graves consecuencias en el espacio cívico como hemos visto por ejemplo en Alemania y España donde se recogen los datos de los participantes en una manifestación pública. La privacidad es una condición indispensable para el ejercicio de los derechos fundamentales, incluido el derecho de expresión y el derecho de reunión pacífica. El temor a ser identificado en el contexto de las manifestaciones públicas puede tener un efecto disuasorio, especialmente para las comunidades que corren mayor riesgo de marginación. En muchas ciudades de Europa, estas preocupaciones son todavía mayores por el uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial para vigilar el respeto de las normas de la COVID-19, así como para proporcionar una falsa sensación de seguridad tras los recientes ataques terroristas, en un contexto de vacío jurídico y falta de control por parte de la opinión pública. También se han documentado ejemplos de utilización de tecnologías de vigilancia y redes sociales para seguir a los manifestantes y sancionarlos (por ejemplo, en SI y FR) lo que aumenta aún más la preocupación de que los datos recabados puedan utilizarse más allá de los fines sanitarios.

3. La crisis ha dificultado el diálogo entre las organizaciones cívicas y los órganos de gobierno

Las organizaciones cívicas y sociales conocen de primera mano el impacto de las políticas (o de la ausencia de estas) en la población en general y en grupos específicos. Por lo tanto, pueden ser aliados importantes, al proporcionar datos y propuestas, para aquellas autoridades que quieran abordar las vulnerabilidades de la sociedad y las preocupaciones por temas ambientales. Sin embargo, **las circunstancias excepcionales desencadenadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19 crearon enormes obstáculos para el buen funcionamiento del diálogo civil.** Las instituciones debían actuar con rapidez y eficacia para frenar la propagación del virus y reducir el terrible impacto que las restricciones estaban teniendo en la economía y en la población. El aumento de la carga de trabajo, unido al teletrabajo y a la necesidad de respetar las distancias de seguridad, afectaron en gran medida la capacidad de las instituciones para responder al número creciente de solicitudes de diálogo y consulta.

En general, **en toda Europa, las medidas para contrarrestar la pandemia redujeron las oportunidades de consulta e influencia al trasladar el poder del brazo legislativo al brazo ejecutivo.** Además, el cierre del espacio público, junto con la abrumadora presencia en los medios de comunicación de las noticias relacionadas con la COVID-19, dificultó la difusión de otros mensajes y creó obstáculos adicionales para que la sociedad civil ejerciera presión sobre los gobiernos en aquellos casos en los que los marcos institucionales para el diálogo no se estaban respetando, no estaban disponibles o habían sido restringidos.

No obstante, y a pesar de los desafíos y límites existentes, en muchos países europeos (en IR, ES, IT, RO, FR, AU y LV) las plataformas nacionales de ONG destacaron que las autoridades habían prestado, en cierta medida, un oído atento a las recomendaciones de la sociedad civil, especialmente en lo que respecta a la financiación pública del sector. En Irlanda y Letonia se anunciaron medidas positivas para fortalecer el diálogo civil. Dicho esto, incluso en los países con un diálogo relativamente abierto entre la sociedad civil y los gobiernos, la calidad y el impacto de los intercambios dependían del Ministerio, así como de las relaciones previas entre ciertas organizaciones

cívicas específicas y las autoridades. Las redes más grandes de organizaciones cívicas gozaron de mejores condiciones para ser escuchadas, mientras que las organizaciones más pequeñas o más críticas encontraron dificultades adicionales para influir en la formulación de políticas. Además, **los procesos de consulta en el ámbito nacional no siempre tuvieron un impacto concreto en las políticas y, a veces, las organizaciones cívicas se quedaron con la sensación de que el diálogo civil era un mero ejercicio teórico y formal sin posibilidad de resultados concretos.** Por último, como tendencia general, el diálogo civil apenas se aplica en materia de asuntos europeos y esto también fue así durante la pandemia.

En algunos países, **la sociedad civil constató que el tiempo disponible para la consulta se había reducido (en BG, EE y LV) o suspendido (en RO y HU),** y algunas políticas se adoptaron haciendo caso omiso de los marcos institucionales del diálogo civil. Se ha constatado que la falta de un diálogo sustancial con el sector es un factor importante que agrava la inercia de los gobiernos ante muchas emergencias de la sociedad (como en DE y EL).

En algunos países, **las autoridades no solo no han tenido en cuenta a la sociedad civil, sino que además han tomado medidas que afectarán a la calidad de la participación pública en el futuro (HR, SI, BG).**

Una de las cuestiones que hicieron más difícil el diálogo y la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en tiempos de crisis fue la falta de acceso a la información, especialmente en lo que respecta a la legislación (que cambiaba continuamente y se adoptaba además por procedimiento acelerado). En algunos países, los gobiernos aprovecharon para suspender la legislación relativa a la transparencia o partes de ella (por ejemplo, en HU, IT, ES y BG).

4. Las dificultades económicas del sector se disparan durante la crisis

En el informe anual de 2019 del Observatorio del Espacio Cívico (Civic Space Watch), ya quedó patente que las «dificultades de financiación» constituían la segunda categoría de acontecimientos que más negativamente afectan a la libertad de asociación. Añadamos a ello que en este contexto en el que la financiación del sector ya se había visto afectada por la crisis financiera y las restricciones de financiación, especialmente en lo que respecta a las organizaciones cívicas con funciones de control e incidencia, **la crisis de la COVID-19 ha tenido un enorme impacto económico y financiero en muchas partes del sector cívico**, como hemos podido documentar en varios países de la Unión Europea. Estas dificultades traen consigo repercusiones a corto plazo, ya que muchas organizaciones corren el riesgo de verse obligadas a detener o reducir sus operaciones; y a largo plazo pues muchas organizaciones cívicas, al no contar con un apoyo sustancial por parte de las instituciones públicas, dejarán de existir o modificarán completamente sus actividades, lo que supondrá un cambio rápido y profundo de todo el sector.

Muchos gobiernos priorizaron la financiación de las empresas con lo que el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil llegó bastante tarde. Sólo una minoría de países europeos creó una financiación específica para el sector que se ajustaba a sus especificidades (AT, IE, IT, LT y PL). Muchos otros países incluyeron a las ONG en algunas de las medidas de apoyo a las empresas (por ejemplo, BE, BG, FR, DE, EE, RO, SI y ES). Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo una parte de las organizaciones cívicas pudo realmente beneficiarse de este apoyo, y esta financiación no se adecuaba a las necesidades específicas del sector.

Las dificultades económicas causadas por el confinamiento aplicado en la mayoría de los países de la Unión Europea se vieron agravadas por la decisión de ciertos gobiernos de modificar las prioridades para hacer frente a la emergencia sanitaria y relegar a un segundo plano la financiación nacional y comunitaria de las ONG. En algunos casos, se teme que uno de los objetivos de estas medidas fuese perjudicar a un subsector específico de las ONG crítico con las autoridades (HU, SI, HR y CZ).

5. La sociedad civil libera todo su potencial

Las organizaciones y movimientos de la sociedad civil desempeñan un papel esencial en el apoyo a las comunidades. Los actores cívicos tienen diferentes estatus y modus operandi en función del país en el que operan. Las tareas y funciones que realizan también varían. Pero en todas partes están en primera línea y por ende son testigos de las situaciones precarias que sufren muchos, tratan de responder a las necesidades de la población, luchan por un acceso efectivo a los derechos de todos, y alertan sobre las limitaciones y las consecuencias adversas de las políticas públicas en vigor. Desde el principio, la crisis ha demostrado hasta qué punto el papel de los agentes cívicos es diverso a la par que fundamental.

Solidaridad y apoyo a las comunidades

Ante las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia de la COVID-19, los ciudadanos y las asociaciones se han organizado para satisfacer las necesidades más urgentes de la sociedad derivadas de la emergencia sanitaria y el aislamiento. Muchos ciudadanos en esta crisis han experimentado el valor de la solidaridad y la han practicado diariamente a través de la asistencia mutua dentro y fuera de sus barrios. Especialmente en la primera ola de la pandemia se produjo un aumento notable de voluntarios que iniciaron acciones espontáneas, muchos de ellos por primera vez en sus vidas. A menudo estas acciones fueron posibles gracias a las infraestructuras asociativas ya existentes.

Un ámbito de acción crucial fue el refuerzo de la capacidad de las instituciones sanitarias públicas mediante el apoyo al personal sanitario, la recaudación de fondos para los hospitales, la realización de campañas de información sobre la pandemia y la producción y distribución de material médico. En toda Europa, muchas organizaciones de la sociedad civil utilizaron sus plataformas para contribuir a la difusión de información fidedigna sobre el virus, así como sobre las medidas impuestas por los gobiernos. Estos esfuerzos resultaron especialmente importantes para llegar a las comunidades más marginadas. Las asociaciones también prestaron asesoramiento sobre el impacto de las medidas gubernamentales y acompañaron a grupos específicos de la sociedad y a la población en

general, para que solicitasen las ayudas propuestas por las autoridades.

Los agentes cívicos ofrecieron un apoyo activo a las comunidades para que pudieran hacer frente a la pandemia de manera más adecuada, también mediante la prestación de servicios sociales a todas las personas necesitadas, incluidos los ancianos, los pacientes, las personas en cuarentena, las minorías desfavorecidas, los migrantes y los refugiados, y las comunidades marginadas y rurales. En muchos casos, estas experiencias espontáneas de solidaridad dieron rápidamente paso a formas de cooperación con las instituciones locales a fin de articular su acción y aplicar las políticas públicas. Esta articulación se pudo observar, por ejemplo, en Italia, donde muchos grupos de ayuda mutua distribuyeron vales y paquetes en los municipios para suplir la falta de servicios públicos en sus comunidades.

Otro aspecto crucial de la solidaridad organizada fue proporcionar ayuda a todos aquellos que sufrían traumas psicológicos causados por el aislamiento y la soledad. Las asociaciones desplegaron sus conocimientos para proporcionar apoyo en materia de salud mental en línea y por teléfono, así como a través de la creación de espacios colectivos en línea para fomentar un sentido de pertenencia y entretenimiento. Las actividades culturales en línea florecieron durante la crisis, en un período en el que muchos se sentían vulnerables: reuniones en línea, retransmisiones, cine, teatro, debates... Se organizaron una multitud de actividades en un intento por ofrecer a las personas la oportunidad de permanecer juntas, de no perder el tejido social, de mantenerse mentalmente activas. Muchos eventos culturales celebrados en línea por actores cívicos también sirvieron para recaudar fondos para el personal médico y para los grupos más afectados por la crisis.

Distribuir información sobre las políticas públicas y hacer que las instituciones rindan cuentas

Las organizaciones cívicas y los movimientos sociales, al estar en estrecho contacto con los grupos más vulnerables y con la población en general, conocen de primera mano los desafíos a los que se enfrenta la sociedad y son conscientes de cómo las políticas públicas (o la falta de ellas) les afectan. A nivel nacional y europeo, las OSC han seguido de cerca la legislación introducida para hacer frente a la emergencia sanitaria, su impacto

en la democracia, los derechos humanos y civiles, así como las medidas tomadas para hacerla cumplir. En toda Europa, han surgido acciones cívicas que demuestran cómo estas medidas han afectado de manera desproporcionada a los migrantes, a los romaníes, a las personas sin hogar, a los que se encuentran en centros de detención y prisiones, a la comunidad LGBTI, a las personas de color y a las familias de bajos ingresos.

Los gobiernos e instituciones a todos los niveles han podido contar con los agentes cívicos como aliados valiosos, aunque exigentes, a la hora de alertar sobre las condiciones de la población y proporcionar información y propuestas para la formulación de políticas. Cuando las autoridades no tuvieron en cuenta las advertencias de los agentes cívicos, estos organizaron actividades de protesta y movilizaron a la opinión pública. La movilización en línea ha resultado crucial para recabar apoyo a favor de las campañas de incidencia y los mensajes de protesta. No obstante, las asociaciones y movimientos también encontraron formas creativas de llevar a cabo manifestaciones en las calles manteniendo las medidas de seguridad.

A principios de junio, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos desencadenó protestas en ciudades de toda Europa. Esta ola de manifestaciones puso de manifiesto la discriminación institucional y la violencia policial que existe desde hace décadas en Europa y que también hemos documentado en múltiples ocasiones durante el confinamiento. Estos movimientos exigen que Europa reconozca el legado actual de su pasado colonial. Finalmente, también hemos sido testigos de cómo otros grupos especialmente afectados por la pandemia también han sabido organizarse y hacer oír sus protestas.

Poner la solidaridad en el centro de los planes de recuperación y proponer alternativas

Si bien el brote de la pandemia creó mucha confusión y preocupación, también abrió un abanico de oportunidades para exigir reformas sustanciales y exhaustivas destinadas a cambiar la forma en que funcionan las sociedades, las economías y las instituciones. Muchas organizaciones cívicas y movimientos sociales llevan años uniendo sus fuerzas y reclamando una sociedad más justa y equitativa. Durante la primera ola de la pandemia, florecieron las iniciativas conjuntas con el objetivo de instar a pensar en un futuro mejor una vez que haya pasado la emergencia sanitaria y gestionar de

forma colectiva los cambios inevitables que esta crisis traerá consigo. Esta movilización en busca de alternativas no sólo se dirigió a sectores específicos, sino que también permitió ampliar las coaliciones intersectoriales y las reivindicaciones. En el centro de todas las reivindicaciones y movilizaciones que han dado forma a este enfoque más amplio, está la idea de que para recuperarse del trauma colectivo que estamos sufriendo, la solidaridad de todos y con todos tiene que estar en el centro de la agenda política a nivel nacional y europeo.

El espacio para el activismo LGBTI en el punto de mira

La crisis del coronavirus ha supuesto una carga extraordinaria para las organizaciones LGBTI. Como en otros ámbitos, muchos miembros de la comunidad LGBTI se han visto muy afectados por la pandemia y han tenido dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. En este sentido, las organizaciones cívicas que actúan en pro de los derechos de las personas LGBTI constataron un claro aumento de la demanda de prestación de servicios al mismo tiempo que debían hacer frente a una disminución de sus recursos internos. Debido a sus esfuerzos por colmar las brechas humanitarias provocadas por la respuesta de los Estados a la pandemia, su capacidad de desempeñar sus labores habituales se ha reducido, incluyendo el trabajo de incidencia, de análisis político y el establecimiento de medidas a través de actividades de litigio estratégico. Además, las organizaciones se enfrentaron a nuevos obstáculos para acceder a los espacios de promoción que son vitales para informar sobre las políticas de los gobiernos. A largo plazo, es probable que la pérdida de fondos, junto con la probabilidad de que estos fondos no se reemplacen, provoque importantes problemas de sostenibilidad para muchas organizaciones. Todo esto está ocurriendo en un contexto de estancamiento general de los avances en materia de derechos LGBTI (o incluso de deterioro). No obstante, en toda Europa han surgido iniciativas exitosas de la sociedad civil para mantener conectada a la comunidad LGBTI y el espíritu del Orgullo a pesar de las restricciones.

República Checa

Las OSC respaldaron la consolidación de la democracia checa durante la transición postcomunista, pero, como en otros países de Europa del Este, todavía se enfrentan a la escasa confianza del público, al débil reconocimiento del gobierno y a la insuficiente atención por parte de los medios de comunicación. En los últimos años, y especialmente desde las elecciones de 2017, la percepción pública de las ONG se ha caracterizado por un declive constante, una evolución similar a la que se observa en toda Europa central y oriental. Esta desconfianza atiza los temores y sospechas de la sociedad, en beneficio de las fuerzas políticas oportunistas que han aprovechado esta situación para tratar de limitar la democracia. Estas fuerzas

políticas no han cesado en su ataque a las ONG considerándolas como voces críticas y calificando sus acciones de «políticas», amenazando con limitar su financiación pública y eliminar así la posibilidad de que participen en la elaboración de políticas. No obstante, estos preocupantes acontecimientos no afectan a la sostenibilidad y la capacidad de recuperación en general de las OSC checas. En este contexto, la crisis de la COVID-19 exacerbó estas tendencias: por un lado, las voces democráticas han sido objeto de una campaña de desprestigio por parte de los políticos; por otro lado, los actores cívicos han estado en primera línea para responder a los desafíos socioeconómicos y democráticos planteados por la pandemia.

Alemania

La organización de la sociedad civil en Alemania desde el punto de vista jurídico, fiscal y administrativo es relativamente buena. La sociedad civil incluye un importante subsector «corporativista» que trabaja en estrecha colaboración con el Estado y está financiado predominantemente por él, y que desempeña un papel esencial en el sistema de bienestar social, así como un subsector que desempeña funciones de incidencia, promoción, supervisión y actividades de democracia deliberativa. En los últimos años se ha observado una tendencia a limitar el espacio de la sociedad civil para todas aquellas organizaciones que se ocupan de cuestiones «políticas». Las organizaciones de interés público que expresan asiduamente sus opiniones políticas corren el riesgo de perder su condición de entidades sin ánimo de lucro y, por consiguiente, sus ventajas fiscales. El auge de los movimientos de extrema derecha también ha creado preocupación en la sociedad civil democrática alemana. Aunque las medidas de la COVID-19 recibieron un amplio apoyo de la ciudadanía, redujeron las oportunidades de la sociedad civil de participar en la formulación de políticas, lo que creó una sensación de abandono.

Grecia

La organización de la sociedad civil en Grecia ha sido históricamente débil, especialmente en comparación con otros países europeos. Sin embargo, el empobrecimiento de la población producido por las duras políticas de austeridad durante y después del período de rescate (con más de un tercio de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017 y la tasa de desempleo más alta de la Unión

Europea) y la crisis migratoria que estalló en 2016 han hecho que surjan muchas iniciativas informales que no aparecen recogidas en las estadísticas. El descontento hacia las medidas impuestas por la Unión Europea, así como la indignación por lo que se percibe como un abandono por parte de la Unión Europea en cuestiones migratorias, explican la victoria electoral de un partido que tiene como lema «la ley y el orden». Desde su llegada al poder en el verano de 2019, el Gobierno del partido de derechas Nueva Democracia ha restringido el espacio de la sociedad civil, especialmente para los grupos que actúan en pro de los derechos de los migrantes, en un contexto que ya era de por sí difícil para los grupos cívicos. La pandemia del coronavirus de 2020 se convirtió en la tercera crisis importante del país en los últimos 12 años, lo que proporcionó al gobierno griego una justificación adicional para tomar medidas drásticas contra la sociedad civil.

Irlanda

La sociedad civil en Irlanda es muy diversa, desde grupos locales informales hasta organizaciones caritativas nacionales registradas oficialmente u organismos semipúblicos, como universidades y hospitales. El sector se vio especialmente castigado durante la década de crisis social y económica que siguió a la crisis de 2008. Debido a las políticas de austeridad, el apoyo público al sector se redujo en un 41% entre 2008 y 2014. El Estado sigue siendo la principal fuente de financiación de muchas organizaciones. Si bien los actores cívicos participan activamente en la vida política del país, el Estado decidió financiar de forma prioritaria (a veces de forma exclusiva) la prestación de servicios en detrimento de la labor de incidencia. En este contexto, al igual que en el resto de Europa, el sector de las asociaciones caritativas en Irlanda se ha visto enormemente afectado por la crisis de la COVID-19, con una caída vertiginosa de los ingresos por recaudación de fondos de 445 millones de euros. Si bien el Gobierno es uno de los pocos en Europa que proporciona un fondo especial para las organizaciones benéficas, la situación de muchas organizaciones sigue siendo precaria. A pesar de las dificultades, los actores cívicos siguen desempeñando un papel fundamental, ya sea prestando servicios a la población o realizando labores de incidencia que obliguen al Gobierno a rendir cuentas. La crisis actual también ha permitido reforzar la colaboración entre el sector y las autoridades.

Eslovenia

La sociedad civil eslovena abarca una amplia gama de ámbitos de acción, con niveles relativamente altos de voluntariado. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil llevan años sufriendo problemas de reducción de recursos financieros y humanos, especialmente para la organización de campañas y actividades de incidencia. Si bien es cierto que ciertas figuras políticas se han dedicado a vilipendiar en ocasiones a los agentes cívicos, en particular en la esfera del medio ambiente y la migración, el marco legislativo mejoró considerablemente en la primavera de 2018 cuando una ley sobre las organizaciones no gubernamentales -entre otras cosas- definió el término «ONG» y creó un fondo para las ONG destinado a fortalecer el sector, incluido un objetivo de promoción del empleo a largo plazo. No obstante, el año 2020 se ha caracterizado por un rápido deterioro del espacio cívico y del Estado de derecho, tras la formación de un nuevo gobierno de derechas que coincidió con la declaración de la pandemia en el país. Desde mediados de marzo de 2020, el Gobierno ha intentado sin descanso, y a menudo ha logrado, cambiar las normas democráticas y limitar el diálogo con el sector. Estas medidas encontraron la oposición de la sociedad civil y de los ciudadanos que salieron a protestar dando nueva vida a las movilizaciones cívicas eslovenas.

European
Civic Forum 

ACTIVIZED

CIVIC SPACE WATCH REPORT 2020 • STORIES FROM THE LOCKDOWN

CIVIC
SPACE
WATCH 